

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, diecisiete (17) de abril de dos mil veintidós (2022)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ARITIZÁBAL contra GEOMINAS S.A en reorganización, SERVIMINAS S.A.S y GEMI S.A.S. (**Radicado 05001-31-05-014-2015-00229-01**).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de GEOMINAS S.A EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN, a la abogada María Alejandra Ruíz Rivera, con tarjeta profesional No. 389.315 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

**ANTECEDENTES**

Pretendió el demandante la declaratoria de una relación de trabajo con Geominas S.A., ejecutada entre el 10 de febrero de 2011 y el 21 de julio de 2014, para en consecuencia obtener el reconocimiento y pago de los rubros salariales y prestacionales no reconocidos, además de las sanciones por su no pago, la indexación y las costas del proceso.

Sustentó tales pedimentos relatando que se vinculó a Geominas S.A a través de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 10 de febrero de 2011 y hasta el 21 de julio de 2014, cuando decidió presentar su renuncia voluntaria para

cuando percibía un salario de \$6.000.000, data desde la cual se le adeudan salarios, vacaciones y prestaciones sociales causadas.

Gemi S.A.S se pronunció en término con oposición a las pretensiones, indicado que el demandante no prestó sus servicios a Serviminas - Gemi, en tanto el nexo laboral se presentó con Geominas S.A., negando que estén pendientes acreencias laborales por cubrir. Como medios exceptivos formuló lo que tituló: inexistencia de la obligación, incapacidad de pago Geominas S.A. en reorganización, inepta demanda y prescripción.

Geominas S.A por su parte aceptó el vínculo aducido en los extremos temporales indicados con prestación de los servicios a Serviminas y Gemi, señalando su iniciación a través de un contrato a término fijo que posteriormente fue modificado a uno indefinido. Explicó que Geominas participó en proyectos internos con el consorcio Geominas - Gemi y Geominas - Serviminas - Gemi, con negativa de rubros sin cancelar al actor en tanto desde el octubre de 2014 se efectuó un depósito judicial con el que se cubrieron los salarios, vacaciones y prestaciones que impulsaron este trámite, aduciendo no ser procedente el cubrimiento de moras por razón de la crisis económica que atravesó la compañía y que la obligó a inmiscuirse en un proceso de reorganización. Como excepciones de mérito presentó las de pago de la obligación pretendida, renuncia voluntaria por parte del empleado, buena fe, prevalencia del espíritu de la Ley 1116 de 2006, cobro de lo no debido - pago intereses a las cesantías, cobro de lo no debido - pago de los aportes a la seguridad social e improcedencia de aplicación de sanción moratoria en contravía de la Ley 1116 de 2006.

Finalmente, SERVIMINAS S.A.S representado en este trámite judicial por Curador Ad Litem, manifestó no contarle ninguno de los hechos expuestos, con formulación de las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción, carencia de derecho sustantivo y petición de lo no debido.

En audiencia que se celebró el 26 de octubre de 2021, la activa desistió de las pretensiones 2.1 a 2.8 perviviendo la declaratoria del contrato de trabajo y el reconocimiento de las moratorias contempladas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, además de la indexación y las costas, desistimiento que fue aceptado por el Juez de Conocimiento (Archivo 18).

Surtido el trámite de rigor, en sentencia del 30 de marzo de 2022, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín (Antioquia), DECLARÓ que entre el demandante y Geominas S.A. en reorganización, existió un contrato de trabajo a término indefinido por el período comprendido entre el 10 de febrero de 2011 y el 21 de julio de 2014 que terminó por renuncia del trabajador. CONDENÓ a las demandadas de manera solidaria al reconocimiento y pago de la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, la que calculó en la suma de \$20.000.000. CONDENÓ en costas a las demandadas, fijando por agencias en derecho la suma de \$2.000.000 a prorrata entre las condenadas. En esa misma oportunidad, adicionó la providencia, en el sentido de negar la indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por no darse los presupuestos para su imposición.

Esa determinación fue cuestionada a través del recurso vertical por Geominas S.A. oportunidad en la que su apoderada judicial exteriorizó su disenso, por encontrar errada la interpretación del artículo 65 del CST y la jurisprudencia citada en la sentencia, porque cuando la Corte Suprema de Justicia alude a las sociedades en procesos de la Ley 1116 se refiere a la liquidación y no a la reorganización, debiéndose dar análisis a las circunstancias que rodearon el despido, de donde igualmente considera no se deriva la mala fe de la sociedad toda vez que no se probó, enfatizando en la situación financiera de la compañía que fue puesta en conocimiento, sin que los salarios se constituyeran en la exclusiva obligación a su cargo.

Gemi S.A.S. coadyuvó el recurso previo, agregando la equivocación evidenciada frente a la interpretación de la Ley 1116 de 2006, atendiendo a que no porque un empleador ingrese en este proceso de reorganización no tenga intención de pagar

a sus colaboradores lo debido estando confesado por el actor que conocía sobre los problemas económicos de la empresa, por lo que la mala fe debió probarse y no interpretarse. Disiente de la solidaridad declarada en tanto aduce que el demandante fue enviado a laborar en distintos proyectos, cuyos beneficiarios no fueron llamados al proceso, sin que el simple hecho de conformarse un consorcio genere esa responsabilidad solidaria pues ha quedado claro que los servicios fueron prestados a Geominas S.A., hacia varios clientes.

Serviminas S.A.S. tampoco observa que se configure la solidaridad declarada pues el hecho de que el demandante fuera enviado a clientes para la ejecución de su labor no implica la desnaturalización del contrato inicial suscrito con Geominas S.A. Agrega que la mala fe que da lugar a la sanción moratoria no se halla demostrada, en tanto considera justificado el retardo en el pago que se efectuó cuando fue posible, por acogerse a un proceso de reorganización, a más que a esta sociedad ninguna solicitud expresa se elaboró para efectos de las acreencias laborales no canceladas.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

Conforme a lo que es materia de apelación, corresponde a la Sala determinar cómo problema jurídico si es viable la sanción prevista en el artículo 65 del CST, verificándose la procedencia de extender la condena a todas las sociedades que integraron los consorcios consolidados.

Pues bien, para definir la primera de las cuestiones, basta decir que de ningún medio se desprenden actuaciones de la empleadora Geominas S.A, calidad que por demás está por fuera de discusión en esta instancia, que justifiquen el retardo en el pago de los salarios causados para diciembre de 2013 y julio de 2014, ni de las prestaciones sociales y vacaciones por lo tanto, es jurídicamente correcto su imposición, aunado a que la empleadora cometió actos que demuestran que su

actuación laboral, al no cumplir sus obligaciones, no estuvo acompañada de razones atendibles, configurativas de buena fe.

En este punto, debe precisarse que es verdad que esta sanción no se impone de manera automática, en tanto la sola deuda de conceptos laborales no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria, y en ese orden, ha sido una regla jurisprudencial pacífica que deba ser auscultada la conducta asumida por el deudor en cada caso en particular, a fin de determinar si existen razones serias y atendibles que justifiquen la conducta omisiva y lo sitúen en el campo de la buena fe (Ver SL 13187-2015 y SL5040-2019).

Atendiendo el tema específico que nos convoca, la Sala de Casación Laboral ha dicho que el trámite de reestructuración económica no constituye una premisa definitiva, que excluya automáticamente la imposición de la indemnización moratoria, ya que *“no siempre que una empresa se halle en estado de iliquidez o crisis económica, esa sola circunstancia permite exonerarla de la condena por la sanción moratoria, porque aún de encontrarse en esa situación sus representantes pueden ejecutar actos ausentes de buena fe por no pagar los salarios y las prestaciones sociales debidas a la terminación del vínculo laboral y en razón de contar con medios para prevenir ese riesgo”* (Ver SL Rad. 37493 de 2011), lo que implica un análisis suficiente de las condiciones particulares del caso, porque en estos eventos no se trata de que el empleador estime que no debe los derechos que le son reclamados, sino que alega no poder pagarlos por razones económicas; y la quiebra del empresario en modo alguno afecta la existencia de los derechos laborales de los trabajadores, pues éstos no asumen los riesgos o pérdidas del patrono conforme lo declara el artículo 28 del C. S. de T, siendo que el fracaso es un riesgo propio y por ende previsible de la actividad productiva, máxime si se considera que frecuentemente acontece por comportamientos inadecuados, imprudentes, negligentes e incluso dolosos de los propietarios de las unidades de explotación, respecto de quienes en todo caso debe presumirse que cuentan con los medios de prevención o de remedio de la crisis (Ver SL16884-2016).

Bajo esa reflexión, dentro de este escenario judicial se ha hecho irrefutable la realidad financiera por la crisis económica e iliquidez de la empresa dadora del empleo, y así lo era ante los ojos de todos los que integraban el equipo de la compañía, quienes en voces del mismo demandante lo evidenciaron a partir de la

carencia en los pagos, por estar todos sus compañeros allegados en igual situación, y la comunicación remitida por la promotora designada dentro del proceso de reorganización y el representante legal a los empleados sobre el acogimiento a la Ley 1116 de 2006, que para el caso concreto del actor ocurrió el 20 de mayo de 2014 cuando aún se encontraba vigente su vinculación, donde por demás se informa la titularidad de sus acreencias en la suma de \$15.972.865 a mayo 01 de 2014 (Pág. 141 y 192 Archivo 04), situación económica que se ve concretada con lo consignado por la Superintendencia de Sociedades en el auto de apertura del proceso de reorganización empresarial de fecha 02 de mayo de 2014 (Págs. 185-190 Archivo 04), donde igualmente se revelaron los incumplimientos no solo laborales, sino a las obligaciones de índole mercantil, fiscal y de seguridad social.

Igualmente debe tenerse en consideración que pese a ese grave escenario financiero, la demandada Geominas S.A, como bien lo dejaron ver las deponentes Susana Castrillón Restrepo - *Auxiliar Contable Geominas S.A-* y Adriana Lucía Suárez - *Contadora Geominas S.A para la época-* priorizó los pagos de los que atendían el área de Consultoría al que pertenecía el actor, lo que se pudo lograr ante la subrogación que asumió una de las consorciadas - Gemi S.A.S-, cubriendo lo adeudado al actor para el 21 octubre de 2014 por medio de depósito judicial consignado a órdenes del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín (Págs. 136, 138 y 173), esto es, luego de transcurridos poco más de tres meses desde el finiquito del vínculo por decisión del trabajador, y previo a interponer esta acción judicial que ocurrió el 24 de octubre de 2014 (Pág. 9 Archivo 04).

No se ignora tampoco que previo al inicio del proceso de reorganización ya habían rubros salariales y prestaciones desde finales del año 2013 pendientes por asumir, porque valga decir, las vacaciones no generan esta consecuencia sancionatoria, pero para esta Sala de Decisión incluso bajo esa premisa, la iliquidez que impulsó el trámite de reactivación económica con intervención de la Superintendencia Financiera si se constituye en una excusa válida, satisfactoria y justificativa para haber dejado de pagar las obligaciones del demandante, porque además que en el panorama de la realidad financiera, no es dable sugerir que solo hasta cuando se emitió el auto que admitió el plurimentado proceso de reorganización fue que surgió la complicación financiera y la incapacidad de pago inminente, no es posible denotar conductas de mala fe, sino que contrario a ello, se evidencia toda la gestión que bajo esas condiciones pudo realizar la sociedad para finalmente

cubrir por intermedio de otro lo debido a su ex trabajador, sin que ello de cuenta de una intención de soslayar los derechos de este, ni se demuestra apatía o desinterés ante sus acreencias, sino que en contraposición a ello, se buscó resarcir lo debido, incluso sin espera a la graduación de créditos y derechos que se presentó ante el juez del concurso el 24 de noviembre de 2014 de lo debido al 01 de mayo de 2014 (Págs. 244-245 Archivo 04), donde si bien se incluyó al señor López Aristizábal, ya su saldo no solo frente a las obligaciones causadas con posterioridad al inicio del proceso, había sido cancelado, cubrimiento que también ocurrió antes de procederse por parte de la aseguradora - Seguros del Estado - el 13 de noviembre de 2014 a requerir la documental necesaria del actor a fin de hacer efectiva la garantía de la póliza N° 65-45-101-020891, donde fue tomador el Consorcio Geominas - Gemi (Págs. 139-140 Archivo 04).

Así, atendiendo que la sociedad obligada en este caso no desconoció su compromiso con procura de deshacerse de las obligaciones, que es finalmente lo que sanciona la indemnización pregonada, sino que alegó insuperables hechos impeditivos de su cumplimiento en oportunidad que fueron demostrados, no logra evidenciarse que los representantes de la empresa ejecutaran actos ausentes de buena fe, porque no puede atribuirse como un acto de mala fe, bajo las premisas y circunstancias fácticas que estaban rodeando la situación de la parte patronal que no pudo tener otra razón que la iliquidez dada a conocer, que haya tardado poco más de tres meses para cancelar los rubros adeudados desde que se extinguió la relación de trabajo, notándose que finalmente el empleador cumplió y honró los compromisos adquiridos frente al demandante.

En virtud de ello, en este particular asunto es dable exonerar a la demandada de la satisfacción de esta obligación sancionatoria, debiendo en ese orden, revocarse este punto de la decisión, lo que de paso derruye la solidaridad declarada para efectos del reconocimiento de este concepto.

En síntesis, el numeral segundo de la decisión de primera instancia habrá de ser revocada para en su lugar, absolver a la parte demandada de la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST.

Por la forma en como fueron resueltas las apelaciones, y en atención a lo que pregona el artículo 365-4, las costas de ambas instancias estarán a cargo del


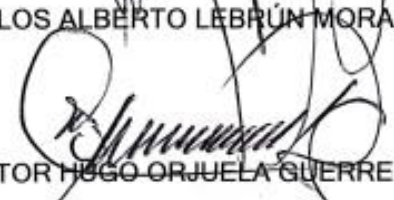

demandante, en esta sede se fijan las agencias en derecho en la suma de \$300.000 en favor de cada demandada.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** el numeral segundo de la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocidas, para en su lugar **ABSOLVER** a las demandadas de la indemnización por falta de pago por las razones expuestas en esta providencia. Las costas como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese por EDICTO.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

<b>Radicación:</b>	<b>05001310501420150022901</b>
<b>Proceso:</b>	<b>ORDINARIO LABORAL</b>
<b>Demandante:</b>	<b>FRANCISCO JAVIER LOPEZ ARISTIZABAL</b>
<b>Demandado:</b>	<b>GEMI S.A.S.</b>
<b>M. P.</b>	<b>CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES</b>
<b>Fecha de fallo:</b>	<b>17/04/2023</b>
<b>Decisión:</b>	<b>REVOCA NUMERAL SEGUNDO</b>

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 18/04/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario